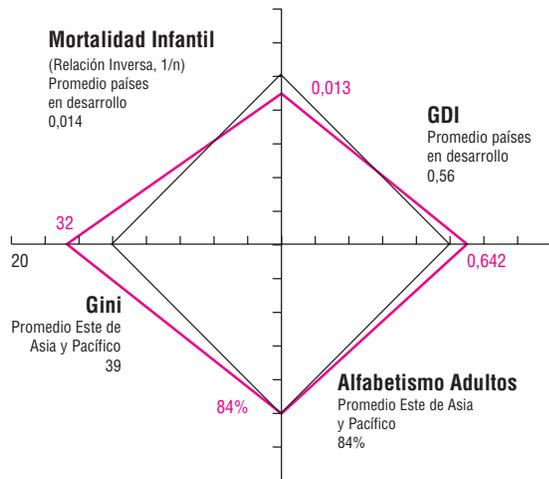


•KAFIL YAMIN

LAS JOYAS DE CIKINI



El Diamante de la Equidad: valores nacionales en terracota comparados con los regionales, en azul.

Durante décadas, el mercado tradicional de Cikini en el centro de Jakarta ha sido un lugar de reunión de pequeños comerciantes de joyas dispuestos a obtener sus humildes sustentos en la capital indonesia.

«El mercado tradicional cumple la función de un banco para nosotros. Cuando tenemos dinero, compramos un anillo, un aro o una pulsera. Pero cuando necesitamos efectivo, los vendemos», explicó Maimunah, de 38 años, cliente de Cikini desde hace más de tres lustros.

Pero el bullicioso mercado, familiar para los residentes de Jakarta, tiene sus días contados. Sólo 32 de los 479 quioscos de joyería se mantienen abiertos, a medida que la multiplicación de enormes centros comerciales alejan a los clientes habituales.

«Cada vez está más tranquilo por aquí», expresó Mahmud, de 47 años, propietario de una tienda de joyería desde hace dos décadas. «La gente prefiere ir de compras a aquel centro co-

mercial», dijo, señalando al enorme Cikini Mall, frente a su puesto.

El mercado de Cikini dista mucho de ser una salvación para los indonesios más pobres, pero los cambios que allí ocurren revelan cómo el intento de modernizar y enriquecer al país puede afectar de manera adversa las vidas de personas comunes, supuestamente beneficiadas por las transformaciones.

La situación refleja la forma en que las prioridades orientadas por el mercado apuntan a la modernización con frecuencia a costa de los necesitados y menos poderosos.

A lo largo de los años, cientos de mercados tradicionales en el país se convirtieron en modernos supermercados y centros comerciales. Es por ello que el gobierno los incluyó en una lista de programas de «rejuvenecimiento».

Ilyas Ruhiyat, líder de la organización musulmana Nahdlatul Ulama, señaló que los programas excluyeron a los pequeños comerciantes, que no tienen el peso de los grandes intereses comerciales.

«Los resultados del desarrollo no se distribuyen en forma equitativa y eso puede enojar a la gente», advirtió. Algunos proyectos de rejuvenecimiento fueron resistidos por los moradores del mercado tradicional.

«Si los moradores de algunos sitios se resisten al proyecto de «rejuvenecimiento», ya se sabe lo que pasará después: un incendio. Y después los bomberos llegarán tarde», dijo un vendedor ambulante en el centro de Jakarta.

«La próxima escena será un cartel colocado en el lugar del incendio indicando que el lugar es propiedad del Estado y que se realizará un proyecto «público» allí», destacó.

Este quizá sea un ejemplo urbano, y por tanto limitado, del archipiélago de más de 13.000 islas y 204 millones de personas.

Pero Ignas Kleden, investigador del centro de investigación Sociedad de Estudios Políticos y Económicos (SPES), dijo que el fenómeno demuestra claramente que el gobierno está de parte de los grandes intereses comerciales.

«La gente diría «al diablo con el compromiso declarado hacia los menos afortunados, miren lo que están haciendo»», manifestó Kleden.

Aunque el gobierno logró reducir drásticamente los niveles de pobreza absoluta, aún tiene que hacer lo mismo para garantizar ayuda especial a los menos privilegiados e intentar resolver la desigual distribución de la riqueza en el país.

Es de destacar la conducta de Indonesia en la reducción de la pobreza, así como la de varios de sus vecinos del sudeste de Asia. 70% de los indonesios vivían por debajo de la línea de pobreza hace 25 años, pero las cifras oficiales revelan que la misma había disminuido a 14% para 1996.

El logro no es pequeño para un país tan extendido con la cuarta población del planeta. Pero es especialmente preocupante la brecha entre ricos y pobres que alimenta el descontento popular y contribuyó a generar los disturbios en las provincias en los últimos años.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que, de 1981 a 1991, la relación de desigualdad entre el 20% de ingresos más altos de la población y el 20% más bajo era de 4,9 a 1.

Así mismo, es probable que el intento de solucionar la brecha en el ingreso sea cada vez más difícil a medida que Indonesia adopta medidas de austeridad incluidas en un programa de rescate financiero encabezado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), implementado recientemente debido a la inestabilidad financiera provocada por la crisis monetaria asiática.

El FMI exige recorte a subsidios, políticamente sensibles, sobre los combustibles, alimentos y fertilizantes. Aunque el esfuerzo puede ayudar a convencer a los inversores internacionales de que el país está pronto para ajustarse el cinturón, la medida puede generar dificultades al gobierno.

«El FMI tiene una imagen de realizar recortes en todo (para los pobres), lo que podría desestabilizar la situación política», alertó Loekman Soetrisno, profesor de desarrollo rural de la Universidad de Gadjah Mada, en Jakarta. *«Si ajustan el cinturón de los pobres, deben ajustar también el de los ricos»,* declaró.

Los pobres de Indonesia son los que padecerán más por los recortes del gasto. Mientras el ingreso por habitante asciende a mil dólares anuales, el economista Faisal Basri señaló que 80% de la gente gana menos de 250 dólares por año.

Los efectos de la crisis económica podrían haberse mitigado si el gobierno hubiera preparado redes de seguridad adecuadas mientras el crecimiento del país era sostenido.

En muchos proyectos de «desarrollo», estos esfuerzos, como los programas de modernización que incluyen la expulsión de los pequeños comerciantes, podrían incluso eliminar oportunidades para que los pobres mejoren su suerte.

«En nuestra opinión, los pobres son arrojados a la periferia de la comunidad», indicó Kleden.

AJUSTANDO EL CINTURÓN

El gobierno de Indonesia lanzó numerosos programas contra la pobreza a partir de la Cumbre Social de 1995 donde prometió concentrar su esfuerzo en los más pobres y los sectores excluidos del crecimiento económico.

En 1996, el presidente Suharto solicitó la ayuda de la población adinerada para ayudar a reducir la creciente brecha del ingreso e informó a 300 de los empresarios más ricos del país sobre los riesgos sociales que esta supone.

El mandatario instó a estas personas a reservar 2% del ingreso neto de sus compañías para el fondo gubernamental de lucha contra la pobreza.

«Los empresarios tienen una responsabilidad en la reducción de la pobreza porque su actual buena fortuna es producto de la estabilidad social», dijo Suharto.

En aparente respuesta al pedido de Suharto, los empresarios accedieron al llamado «Acuerdo de Jimbaran».

El dinero se envía al Fondo de Prosperidad Independiente cuyo supuesto objetivo es ofrecer préstamos de bajo interés de 20.000 rupias (5 dólares) y una donación de 2.000 rupias (50 centavos de dólar) a cada una de los 13,1 millones de familias pobres del país. Desde entonces, las empresas entregaron 128 millones de dólares.

A principios de 1997, el pedido de Suharto se convirtió en ley mediante un decreto presidencial que fijó sanciones legales a quienes lo infrinjan. La norma también obligó a las compañías estatales a aportar 5% de sus ingresos netos a las empresas cooperativas.

Más recientemente, las grandes empresas fueron convocadas para establecer sociedades comerciales con pequeñas firmas y cooperativas. Se instruyó a las compañías estatales que se convirtieran en «padres sustitutos» de las pequeñas empresas.

El gobierno recomendó a los bancos que destinen 20% de su crédito a éstas luego de comprometer al estatal Banco Nacional de Indonesia (BRI) a brindar préstamos de 50 millones de rupias (12.600 dólares), libres de intereses, a pequeños negocios sin capital.

Estos esfuerzos, percibidos por algunos como una demostración de voluntad política, podrían funcionar hasta cierto grado para asegurar el compromiso de los más acaudalados a ayudar a los necesitados.

Los funcionarios de gobierno sostienen que los ricos deben participar en el objetivo de reducir aun más los casos de pobreza de 14 a 10% de la población.

Pero estas ambiciosas metas deben enmarcarse dentro de las actuales condiciones sociales y económicas. A pesar del fuerte crecimiento, el progreso económico ha sido desigual.

La tasa oficial de desempleo permanece por debajo del 5%, pero algunos afirman que la cantidad de subempleados podría sextuplicar esa cifra. De los 2,3 millones de personas que ingresan todos los años al mercado de trabajo, sólo 300.000 consiguen empleo de tiempo completo.

Mientras, los métodos autoritarios que ayudaron a reducir la pobreza alimentan el descontento de los pobres y marginados.

Por ejemplo, los críticos expresan sus dudas sobre la naturaleza basada en la caridad de los programas de lucha contra la pobreza.

«Los paquetes contra la pobreza aún tratan a los marginados como meros receptores de ayuda y no como sobrevivientes», dijo Bambang Ismawan, profesor de la Universidad de Indonesia.

«Por un lado, este tipo de paquete subestima su dignidad humana y por otro, limita los problemas de la pobreza a asuntos económicos», añadió.

Ismawan dijo que la lucha contra la pobreza debe tener el objetivo de ayudar a los pobres a utilizar al máximo su capacidad y

mantener su dignidad. Con ese fin, los pobres deben participar activamente en la implementación de los programas y no ser considerados receptores de dádivas.

«Necesitamos programas que los incluyan en las decisiones. La opción no refiere sólo a dónde se debe excavar el pozo sino si el mismo se debe crear en primer lugar», arguyó.

Asmara Nababan, de INFID, una ONG de Jakarta dedicada al desarrollo urbano, sostuvo que la naturaleza caritativa de muchos programas contra la pobreza agrava la situación. Con este tipo de programas *«los pobres tienden a esperar. No logran alcanzar a los demás»*.

Como ejemplo, citó el caso de la GNOTA (campaña nacional de padres adoptivos), fundación dirigida por la nuera de Suharto que brinda ayuda a la enseñanza básica.

La fundación recauda enormes cantidades de dinero de empresarios bien relacionados, facilitada por el hecho de que su directora pertenece a la familia presidencial, y entrega donaciones en forma regular a escuelas y escolares necesitados.

«Este es sólo un intento de conseguir el elogio del público» y no mejora mucho la capacidad de los pobres para cambiar su vida, opinó Nababan.

«El gobierno debería aumentar los impuestos, destinar un porcentaje a la enseñanza básica y así los niños podrían ir a la escuela en forma gratuita. La enseñanza básica debería ser gratuita», manifestó.

Pero la culpa de todo no reside en el gobierno. Si la campaña contra la pobreza no hace lo suficiente para potenciar a la gente en lugar de convertirlos en objetos de caridad, entonces algo de responsabilidad corresponde a las ONG que aseguran ayudar a los pobres, añadió Nababan.

«Las ONG se ocupan de los derechos humanos y saben que la pobreza es contraria a estos derechos», dijo, aunque concedió que las organizaciones cuentan con pocos fondos y menos personal que el gobierno.

- IPS Informe especial para Control Ciudadano.